

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, vencido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por YOLANDA CELIS MURILLO contra COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Rad. No. 05001-31-05-011-2019-00270-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Ana María Pineda Jaramillo, con tarjeta profesional No. 226.051 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES:

Pretende la demandante, en síntesis, previa la nulidad o la ineficacia de la afiliación inicial que realizó al régimen de ahorro individual, AFP Protección S.A., se tenga como afiliación válida la existente con el régimen de prima media, administradora Colpensiones y, como consecuencia, que es beneficiaria de la transición pensional, para darle aplicación a la ley 33 de 1985, se condene a la reliquidación de la pensión de vejez a partir del 20 de

marzo de 2011, teniendo en cuenta un IBL de \$3.224.517; además que se condene a la indexación de la suma que resulte y a las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente: nació el 20 de marzo de 1957, lo que hace que para el 1 de abril de 1994 tuviese más de 37 años de edad, y para el 20 de marzo de 2012 55 años de edad; es beneficiaria de la transición pensional consagrada en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en concordancia con lo regulado en la Ley 33 de 1985; fue empleada pública desde el 2 de julio de 1984 al 28 de febrero de 2005; se trasladó al RAIS, AFP Colfondos, el 30 de junio de 1995; cotizó a la anterior administradora hasta el 30 de diciembre de 1996; luego regresó al ISS y cotizó entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de mayo de 2012; por comunicación del 10 de agosto de 2007, Colfondos le hizo saber que mediante comité celebrado el 14 de junio de 2007 estuvo multifiliada y que la afiliación válida era la del RPM (ISS); posteriormente, mediante resolución del 23 de abril de 2013 del ISS se le reconoció pensión de vejez bajo los derroteros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la cual fue reajustada en varias oportunidades, pero nunca por haber sido beneficiaria de la transición pensional; al momento del traslado a que se hizo referencia anteriormente, no se le brindó una información clara, precisa y completa de las ventajas y desventajas, riesgos o beneficios que le otorgaría tal proceder; y reclamó a Colpensiones el reajuste aquí pedido, pero le fue negado.

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES dio respuesta oportuna a la demanda, en la cual se opuso a que se declarara la nulidad o ineficacia de la afiliación, y para el efecto expuso razones de hecho y de derecho. Se pronunció frente a los hechos manifestando que aceptaba la edad, el traslado de régimen, el reconocimiento de la pensión de vejez y sus correspondientes reliquidaciones de conformidad con los documentos anexados; de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: improcedencia de la declaratoria de la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, prevalencia de la

autonomía de la voluntad privada, cosa juzgada, pérdida del régimen de transición, prescripción e imposibilidad de condena en costas

Así mismo, la AFP Colfondos S.A. aportó en el plazo otorgado contestación a la demanda, en la cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, bajo el argumento de que la afiliación tiene plena validez y no se configuró vicio en el consentimiento. Se pronunció frente a los hechos manifestando que unos eran ciertos, tales como la edad y la afiliación a la entidad; de otros expresó que no tenían la calidad de hechos; y de los restantes dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe de Colpensiones, ausencia de vicios en el consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, prescripción, compensación y pago, entre otras.

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del 15 de junio de 2022 definió la controversia en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la vinculación al RAIS de la señora YOLANDA CELIS MURILLO quien se identifica con cédula de ciudadanía n° 42.056.523 administrado por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

SEGUNDO: ORDENAR a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES EICE. los gastos de administración (primas de los seguros de invalidez y sobreviviente, y el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima), por el tiempo en que la demandante estuvo afiliada al RAIS, esto es entre julio de 1995 a diciembre de 1996, en razón a esta declaratoria de ineficacia del traslado, de conformidad con el artículo 43 del CST, el literal b), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 271 de la misma ley, y especialmente los artículos 963 y 1746 del código civil, esto es incluyéndose lo cancelado por la prima de reaseguro de FOGAFIN y los aportes al fondo de solidaridad pensional, que se hubieren causado.

TERCERO: Se ORDENA a COLFONDOS S.A., a indexar los dineros a devolver por gastos de administración, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes,

además del porcentaje destinado al fondo de garantía de la pensión mínima, incluyendo lo cancelado por la prima de reaseguro del Fogafin y los aportes al fondo de solidaridad que se hubieren causado) durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a dicho fondo de pensiones y sin aplicar equivalencia alguna. E igualmente se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos aparezcan discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información importante que los justifique.

CUARTO: Todos estos valores antes enunciados, deben de ser consignados a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, quien deberá recibirlos, reactivando la afiliación de la demandante sin solución de continuidad en RPMPD. esto es como si nunca se hubiese desafiliado del RPMPD.

QUINTO: Se declara la falta de jurisdicción para conocer del reajuste de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, y se dispone la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, por ser los competentes para decidir sobre la misma.

SEXTO: Las COSTAS están a cargo de las entidades demandadas, dentro de las cuales se fija como agencias en derecho la suma de \$1'500.000,00 correspondiendo el valor de \$1'000.000,00 a COLFONDOS SA., y la suma de \$500.000,00 a cargo de COLPENSIONES EICE.

SEPTIMO: NO PROSPERAN las excepciones de prescripción, cosa juzgada y compensación y pago, propuestas por las entidades demandadas.

Inconforme con la decisión, interpusieron recurso de apelación los apoderados de la parte demandante y Colpensiones, el cual les fue concedido.

La apoderada de la demandante básicamente presenta inconformidad frente a la falta de jurisdicción que se dispuso, en tanto el precedente jurisprudencial sobre el punto es claro: si se tiene competencia. Para el efecto, cita la sentencia SL10138 de 2015.

Por su parte el apoderado de Colpensiones, con sustento en los decretos 663 de 1993, 692 del mismo año y 720 de 1994, y los principios de legalidad,

confianza legítima y sostenibilidad financiera, solicita que se modifique la decisión de ineficacia que se tomó y, en su lugar, se absuelva de la misma. También cuestiona la condena en costas, en tanto afirma que Colpensiones fue una entidad ajena al traslado al régimen de ahorro individual.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por los apoderados recurrentes, atendiendo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2 de 1984 y artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas impuestas u órdenes dadas a Colpensiones, que puedan entenderse desfavorables a sus intereses, se estudiarán por el grado de la consulta, atendiendo a las directrices que al respecto ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que la demandante nació el 20 de marzo de 1957 (archivo 03 página 13); que obra vinculación al ISS a partir del 1 de enero de 1997 (archivo 03 página 14), un traslado al RAIS (Colfondos) con eficacia a partir del 1 de julio de 1995 (archivo 03 páginas 14 y 38) y un posterior regreso al ISS a partir del 1 de enero de 1997 (archivo 03 página 31); y que el ISS, hoy Colpensiones, le reconoció la pensión de vejez mediante resolución del 23 de abril de 2013 a partir del 2 de mayo de 2012 (archivo 03 páginas 40 y ss.), la cual ha sido reajustada en dos oportunidades

Con estos presupuestos lo primero que debe entrar a esclarecerse, no solo porque así lo impugnó Colpensiones, sino porque tal decisión afecta a esta entidad, es si la ineficacia declarada se encuentra o no ajustada a los mandatos legales y a las directrices que con persistencia ha establecido la jurisprudencia laboral. Luego, si es del caso, se entrará a determinar si es o no

procedente afirmar que la actora es beneficiaria de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

1. En cuanto a lo primero, es preciso rememorar que en un sinnúmero de providencias la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que el acto de traslado de régimen pensional, no es un acto jurídico simple sino complejo, en tanto a más de un simple escrito de vinculación al régimen, se requiere de manera insoslayable un deber de información al afiliado o trabajador, consistente en que se le debe hacer saber por lo menos de las condiciones, riesgos y beneficios que comporta un acto de esta naturaleza, todo con el propósito de que si se da el traslado quede absolutamente claro que existió un consentimiento informado y libre de vicios o irregularidades. Textualmente en la sentencia SL1688 de 2019, dijo:

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Ahora bien, como resulta apenas obvio el traslado que se examina para efectos de determinar su eficacia o no, debe estar produciendo o haber producido sus efectos respectivos, pues de no haber sido así, por sustracción de materia habría que negar su reconocimiento. Uno de estos eventos es el que se conoce como de multifiliación, pues en estos casos, partiendo de la prohibición establecida en el artículo 12 de la ley 100 de 1993 (*“El sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten. ...”*), las administradoras luego de advertir tal situación definen como resolver la violación de tal mandato legal. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 estableció pautas para resolver estos casos de múltiple vinculación y posteriormente, con más detalle, lo hizo el decreto 3995 de 2008.

En el presente caso, en el sentir de esta Sala de Decisión Laboral, existe prueba suficiente de que hubo una multifiliación, en tanto la demandante se trasladó al régimen de ahorro individual de manera irregular. En efecto, en el

documento obrante en el archivo 03 página 76 quedó dicho por parte de Colfondos:

“Finalmente, nos permitimos confirmar que la señora Yolanda presentó conflicto de multifiliación, dirimiendo a favor de Colpensiones, entidad válida para administrar sus recursos pensionales”.

Esta anulación de la afiliación al régimen de ahorro individual, se ratifica no solo con lo que afirma la misma demandante en el hecho 10 de la demanda, sino por las razones que expone la historia laboral en el archivo 03 página 30, en concordancia con la prohibición que existía para esa época de trasladarse antes de que transcurrieran 3 años (literal e. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y art. 15 del Decreto 692 de 1994).

Consecuencia de lo dicho, es que se revocará lo dispuesto por el a quo en materia de ineficacia y, en su lugar, se dispondrá que la señora CELIS MURILLO siempre ha estado vinculada al régimen de prima media.

2. Aclarado lo anterior, resulta preciso pasar a establecer si la señora CELIS MURILLO goza o no de los beneficios de la transición pensional consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, beneficio que no es otro que el de aplicar regímenes pensionales anteriores a la vigencia de la ley, lo atinente a edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto, entendido este como porcentaje, siempre y cuando los hombres tuvieran 40 años de edad, las mujeres 35 años de edad o 15 años de servicios prestados o cotizados.

Conforme a la fecha de nacimiento de la demandante, que como quedó dicho en párrafos anteriores, fue el 20 de marzo de 1957, no queda duda que es beneficiaria del régimen de transición, pues cumplió 35 años de edad el 20 de marzo de 1992. Siendo ello así, de la historia laboral aportada, en especial de las certificaciones de información laboral existentes en el archivo 03 páginas 14 y siguientes, queda totalmente claro que fue empleada pública y que su régimen pensional era el establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, norma que dice así:

ARTÍCULO 1º.- *El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.*

Por lo demás, de las mismas certificaciones acabadas de referir, también se acredita que la demandante trabajó más de 20 años de servicios en una entidad pública del orden departamental, y si ello es así, obvio resulta concluir que tiene derecho al reajuste solicitado, pero este solo se reconocerá a partir del 25 de julio de 2015, pues las sumas anteriores se encuentran prescritas, ya que la reclamación por este concepto solo se hizo a Colpensiones el 25 de julio de 2018 (archivo 03 páginas 77 y ss.).

Partiendo entonces que para esta fecha debió de haber tenido una pensión de vejez equivalente a \$2.418.388, pero solo recibió una de \$2.396.591, se tiene que el monto debido hasta el mes de marzo de este año 2023, asciende a la suma de \$2.636.069 (véase tabla anexa), cantidad que se deberá indexar, reajuste por reajuste, al momento del pago, dado que se considera que los intereses moratorios no deben imponerse porque los distintos reajustes realizados, en un contexto de un traslado irregular al régimen de ahorro individual, así lo hacen pensar.

Para finalizar este tema del reajuste de la pensión, agréguese que no acertó el fallador de primer grado al disponer la falta de jurisdicción para conocer de este asunto, por cuanto la regla de competencia establecida en el artículo 104-4 de la ley 1437 de 2011, aplica para aquellos eventos de seguridad social de empleados públicos cuando el régimen esté administrado por una persona de derecho público, y en el presente caso la demandante no ostentaba la condición de empleada pública desde el 28 de febrero de 2005 (archivo 03 páginas 14 y 29).

Igualmente se negará la excepción de cosa juzgada, pues partiendo que para el reconocimiento de este medio exceptivo, acorde con la regulación establecida en el artículo 303 del CGP, que exige la presencia de identidades

de personas, de objeto y de causa, no es posible hablar de esta última, ya que en los distintos reajustes de que dan cuenta las pruebas arrimadas al proceso, ninguna de estas está asociado a la aplicación del artículo 1 de la ley 33 de 1985.

Las restantes excepciones, entre ellas las que se llamaron inexistencia de la obligación, buena fe, ausencia de vicios en el consentimiento y compensación, entre otras, por no envolver hechos extintivos o modificativos del derecho reconocido, no guardar referencia al mismo o no existir prueba, pues están orientados a la ineficacia.

Costas de la instancia a cargo de la parte demandada y vencida en juicio. Es decir, COLPENSIONES. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de un SMLMV, es decir, \$1.160.000.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación y consulta y en su lugar, se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- a pagar por concepto de reajuste a la pensión de vejez que disfruta la señora YOLANDA CELIS MURILLO, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.056.523, la suma de \$2.636.069, hasta el mes de marzo de 2023. A partir de este momento se le deberá reajustar la referida pensión, incluyendo las mesadas adicionales, en la suma de \$33.308, sin perjuicio de los aumentos legales. ABSUELVESE a las demandadas de la petición de ineficacia y sus consecuencias.

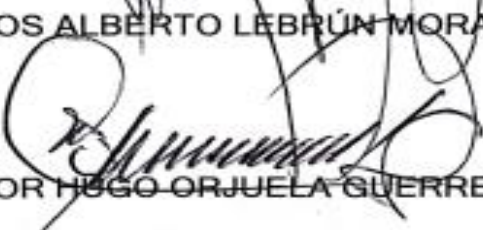
Costas de las instancias a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV (\$1.160.000).

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

AÑO	IPC	VALOR RECONOCIDO	VALOR REAL	DIFERENCIA MENSUAL	NUMERO MESES	TOTAL
2010	2,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2011	3,17%	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2012	3,73%	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2013	2,44%	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2014	1,94%	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2015	3,66%	\$ 2.396.591	\$ 2.418.388	\$ 21.797	6	\$ 135.141
2016	6,77%	\$ 2.558.840	\$ 2.582.113	\$ 23.273	13	\$ 302.545
2017	5,75%	\$ 2.705.974	\$ 2.730.584	\$ 24.611	13	\$ 319.941
2018	4,09%	\$ 2.816.648	\$ 2.842.265	\$ 25.617	13	\$ 333.026
2019	3,18%	\$ 2.906.217	\$ 2.932.649	\$ 26.432	13	\$ 343.617
2020	3,80%	\$ 3.016.653	\$ 3.044.090	\$ 27.436	13	\$ 356.674
2021	1,61%	\$ 3.065.222	\$ 3.093.100	\$ 27.878	13	\$ 362.417
2022	5,62%	\$ 3.237.487	\$ 3.266.932	\$ 29.445	13	\$ 382.784
2023	13,12%	\$ 3.662.245	\$ 3.695.554	\$ 33.308	3	\$ 99.924
TOTAL						\$ 2.636.069

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501120190027001
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	YOLANDA CELIS MURILLO
Demandado:	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	20/04/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario